



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN**

Magistrada Ponente: Dra. Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020)

AUTO NO AVOCA CONOCIMIENTO

Medio de control	Control Inmediato de Legalidad del Decreto 077 de 21 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldesa del Municipio de Puerto Escondido
Radicación	23.001.23.33.000.2020-00184-00

I. ASUNTO

Procede el Tribunal a decidir si avoca el conocimiento en el asunto de la referencia.

II. ANTECEDENTES

La Alcaldía Municipal de Puerto Escondido del Departamento de Córdoba, el día diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020), remitió a la Oficina Judicial de esta Seccional, copia del Decreto N° 077 del 21 de marzo de 2020, *“Por el cual se declara la situación de calamidad pública en el Municipio de Puerto Escondido, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional, situación epidemiológica causada por el coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones destinadas a mitigar los impactos de riesgo dentro de la emergencia sanitaria”* correspondiéndole por reparto el conocimiento del asunto a este Despacho.

El citado acto administrativo fue enviado al correo electrónico habilitado para imprimirle el trámite de rigor, conforme lo preceptuado en el Acuerdo número PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que mantiene la excepción de la suspensión de términos adoptada en los Acuerdos PCSJA20-11517, 11521, 11526 y 11529 de marzo de 2020, respecto de las actuaciones adelantadas por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos con ocasión del control inmediato de

legalidad prescrito en los artículos 111, numeral 8, 136 y 185 numeral 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES

El artículo 215 de la Constitución Política autoriza al Presidente de la República a declarar el Estado de Emergencia cuando se presenten circunstancias distintas a las previstas en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico del país, o constituyan grave calamidad pública.

El artículo 20 de la Ley 137 de 1994, “Ley Estatutaria de los Estados de Excepción”, precisa que: *“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.”*

Por su parte, según lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde a los Tribunales Administrativos del lugar donde se expidan, conocer en **única instancia**, del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales.

No obstante, visto el contenido del acto administrativo estudiado, encuentra esta Sala Unitaria que el mismo no fue proferido en desarrollo a la declaratoria del estado de emergencia, económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, adoptada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido por el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 superior, y la ley 137 de 1994, ni con fundamento en los decretos legislativos suscritos por el Gobierno Nacional en torno a tal declaratoria.

Por el contrario, el Decreto 077 de 21 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldesa del Municipio de Puerto Escondido, tiene sustento principal en la Ley 1523 de 2012 *“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.”*, y en la Resolución N° 385 de 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

En ese orden de ideas, no resulta procedente adelantar el control inmediato de legalidad del mentado decreto municipal, de acuerdo con lo establecido por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto dicho acto administrativo no tiene como fundamento la declaratoria del estado de excepción contenida en el Decreto Presidencial N° 417 del 17 de marzo de 2020, tampoco se funda en los decretos legislativos originados por este.

Se aclara que lo decidido no comporta el carácter de cosa juzgada pues el acto administrativo objeto de análisis es pasible de control judicial ante esta jurisdicción, en aplicación de lo estatuido en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Corolario, al no cumplirse con los requisitos necesarios para iniciar el proceso de control inmediato de legalidad en los términos del artículo 185 del CPACA, no se avocará conocimiento en el asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: NO AVOCAR conocimiento del control inmediato de legalidad del Decreto 077 de 21 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldesa del Municipio de Puerto Escondido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: La presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada, lo que significa que contra el Decreto 077 de 21 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldesa del Municipio de Puerto Escondido, procederán los medios de control previstos en la ley.

TERCERO: Por la Secretaria de esta Corporación, se ordena la notificación de la presente decisión a la Alcaldía de Puerto Escondido y al señor Agente del Ministerio Público. Así mismo, se ordena a la

Alcaldía de Puerto Escondido realizar la publicación de la presente providencia en su portal web.

CUARTO: Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, se ordena que la presente decisión sea comunicada en la página de la Rama Judicial¹ designada para tal efecto.

QUINTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA
Magistrada

¹ Adicional, la publicación se realizará en la página del Tribunal Administrativo de Córdoba, Secretaría del Tribunal, en el portal de «Aviso a la comunidad».